

La consulta plantea si resulta conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), y a su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, facilitar a un colegiado adscrito a dicho Colegio Profesional, copia de la lista de colegiados ejercientes adscritos a los servicios de justicia gratuita, con indicación del domicilio profesional desde la fecha que señala.

I

La transmisión así planteada implica la existencia de una cesión o comunicación de datos de carácter personal, definida por el artículo 3 i) de la Ley Orgánica 15/1999 como “Toda revelación de datos realizada a una persona distinta del interesado”.

En relación con las cesiones, el artículo 11.1 de la Ley indica que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, este consentimiento no será preciso cuando nos encontremos ante alguna de las excepciones del artículo 11.2 de la LOPD.

En relación con este tema, aunque a nivel estatal, ya se pronunció esta Agencia Estatal de Protección de Datos en su Informe de fecha 3 de abril de 2002, en el que se decía:

“Entre esos supuestos se incluye el hecho de que los datos aparezcan recogidos de fuentes accesibles al público; en este caso, la cesión será posible siempre y cuando la misma se produzca en el soporte en que aparece

publicada la citada fuente. A estos efectos, el artículo 3 j) de la Ley dentro de la enumeración taxativa de estas fuentes incluye a “las listas de personas pertenecientes a grupos de profesionales que contengan únicamente los datos de nombre, título, profesión, actividad, grado académico, dirección e indicación de su pertenencia al grupo”.

Sin embargo, los datos a que alude la consulta, relativos a la lista de adscripción voluntaria de los colegiados a los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, regulados por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y cuya organización atribuye el artículo 22 de esta norma a los Consejos Generales de la Abogacía Española y de los Colegios de Procuradores de los Tribunales de España y sus respectivos Colegios, a través de sus Juntas de Gobierno, no serían incluibles en el supuesto examinado de fuente accesible al público.

Otro supuesto de excepción al consentimiento en la cesión de datos de carácter personal es el regulado en el apartado segundo, letra a), del artículo 11 la LOPD, esto es, que la cesión esté autorizada en una Ley. En este sentido, debe aludirse al artículo 24 de la ya citada Ley 1/1996, que establece: “Los Colegios profesionales establecerán sistemas de distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios para la designación de los profesionales de oficio. Dichos sistemas serán públicos para todos los colegiados y podrán ser consultados por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita”.

Dicho precepto impone a los Colegios profesionales afectados dar publicidad, si bien limitada a los colegiados, de los sistemas de distribución de los distintos turnos de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas, así como de los procesos de designación de profesionales. Parece lógico que para tal obligación de transparencia tenga efectividad, la misma conlleve la comunicación a los profesionales colegiados de aquello de ellos que

se encuentran adscritos a dichos turnos, así como la información relativa al número de turnos o servicios asignados a cada uno de ellos en un determinado periodo de tiempo, lo cual, unido al conocimiento del procedimiento de asignación a los mismos de dichos turnos o servicios, completará la publicidad que la norma examinada establece respecto de los colegiados.

Por ello, cabe considerar que dicha comunicación de datos personales, relativa a los colegiados adscritos a dichos turnos o servicios de asistencia jurídica gratuita así como del número de ellos asignados a cada uno, tendría cobertura, desde la perspectiva de la LOPD, en su artículo 11.2 a). “

II

Dicha materia ha sido objeto de regulación por el Real Decreto 273/2007, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias, en virtud de las competencias señaladas en el Estatuto de Autonomía del Principado, en sus artículos 9.2. a) y 10.1, apartados 1 y 33, que, conforme a su exposición demotivos, se aprueba respetando las disposiciones de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, que, a su vez, se contempla como regulación supletoria de aplicación (Disposición Adicional Unica) en lo no regulado por este Reglamento autonómico.

En su artículo 24 regula la gestión colegial de los servicios de asistencia letrada, defensa y representación señalando :” 1. Las Juntas de Gobierno de los Colegios de Abogados y los Colegios de Procuradores del Principado de Asturias regularán y organizarán los servicios de asistencia Letrada y de defensa y representación gratuitas, de quienes soliciten abogado o abogada de oficio en cualquier jurisdicción o no designen abogado o abogada en la jurisdicción penal, conforme a las directrices generales y normas de acceso de los profesionales a los referidos servicios, aprobados por los citados

órganos, que serán, en todo caso, de obligado cumplimiento para los colegiados.

3. La organización de los servicios de asistencia jurídica gratuita se efectuará atendiendo a la mejor defensa del ciudadano, a criterios de eficiencia y funcionalidad en la aplicación de los fondos públicos puestos a su disposición, deberá garantizar su continuidad, velando por la distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios y, cuando el censo de profesionales lo permita, de especialización por órdenes jurisdiccionales.

4. Los sistemas de distribución de los distintos turnos y medios para la designación de los profesionales serán públicos para todas las personas colegiadas, así como para quienes soliciten asistencia jurídica gratuita.

Como puede observarse, el régimen de publicidad se regula de forma idéntica al anteriormente citado del artículo 24 de la Ley 1/1996, respecto del que se emitió el informe referido anteriormente, por lo que desde el punto de vista de la protección de datos de carácter personal debe llevar a la misma conclusión que la alcanzada en su día en el citado informe, concluyendo que la comunicación al colegiado del Ilustre Colegio consultante de las listas de profesionales que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita vendría amparada en el artículo 11.2 c) de la LOPD.

Todo ello en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal,